

Ayer inició sus funciones el nuevo Ministerio de Seguridad Pública:

Criticán que autoridad cuestionada por el incendio de 2024 asuma como seremi (i) de Seguridad en Valparaíso

Se reprocha que la abogada Paula Gutiérrez (PS) haya llegado con tres horas de atraso al Puesto de Mando Unificado el día 2 de febrero y descartara el riesgo de que el fuego llegara a las casas.

MAURICIO SILVA Y MARIO ROJAS

“Preocupante”, “poco serio” y “cuoteo político” fueron parte de las expresiones con que los diputados de la bancada de Renovación Nacional Andrés Celis, Andrés Longton y Camila Flores reaccionaron ante la designación de la secretaria regional ministerial de Justicia de Valparaíso, Paula Gutiérrez (PS), como seremi interina del recién creado Ministerio de Seguridad Pública.

Se sumó a los duros términos el abogado de las víctimas del megaincendio, Luis Cantellano (“inauditó, ella es una de nuestras querelladas”), justificándolos en el desempeño que tuvo la autoridad en el siniestro forestal del 2 de febrero del 2024, al subrogar a la entonces delegada presidencial regional Sofía González (PC). Esto, porque las acciones que desplegó en las primeras horas de la emergencia fueron calificadas de “errores caros e inexcusables” en el informe final de la comisión de diputados que indagó las responsabilidades públicas en el avance del fuego a Viña del Mar y Quilpué, dejando cinco mil casas destruidas y 137 muertos.

Según el informe de la comisión investigadora, Gutiérrez llegó con casi tres horas de atraso al Puesto de Mando Unificado (PMU) que debía integrar junto al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Bomberos y Carabineros. Al llegar al PMU, Gutiérrez efectuó una vocería en la que descartaba que en esos momentos hubiera riesgo para viviendas y convocó a un Comité de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) para las 19:00 horas, el cual luego fue postergado para las 21:00 horas.

PENDIENTE

La demolición de la toma en Cerro Chuño en Arica no registra avances significativos desde el año 2022.



LABOR.—Paula Gutiérrez, seremi (i) de Seguridad Pública en Valparaíso, dijo ayer que su tarea será por un tiempo acotado y con énfasis en medidas estratégicas y tácticas.

Quien fuera presidente de esa comisión parlamentaria, Tomás Lagomarsino (PR), instó ayer al Gobierno a designar rápido a una autoridad de seguridad definitiva, “que tenga competencias en esa materia. No nos sirven dobles seremis que estén realizando dos funciones como Justicia y Seguridad Pública. Justo esta doble función en momentos críticos fue uno de los principales hechos que causó un deficiente manejo del megaincendio. Estaríamos repitiendo”.

“Trabajo destacado”

El delegado presidencial regional Yanino Riquelme (PC) señaló que el nombramiento corresponde al criterio general de designar interinamente en las cabezas regionales del recién creado Ministerio de Seguridad Pú-

blica a los seremis de Justicia.

Además, defendió la labor de Gutiérrez: “Ha desarrollado un trabajo bastante destacado en el ámbito de la Seremi de la Justicia. El tema del megaincendio tiene una arista de análisis judicial que avanzará por su carril”, expresó, señalando que designar el seremi titular va a tomar tiempo para “hacer un análisis bien riguroso”, ya que “el candidato debe cumplir consideraciones profesionales y técnicas”.

Paula Gutiérrez, por su parte, se limitó a expresar que echará a andar la nueva institucionalidad regional en materia de seguridad.

Solicitan acciones en toma del Cerro Chuño, en Arica

En tanto, el Ministerio de Seguridad Pública se estrenó ayer en la Región de Arica y Parinacota con una demanda levantada desde diversos sectores: erradicar los lugares de asentamiento y focos de bandas de

crimen organizado internacionales instaladas en la zona.

Allí, la mira está puesta en la toma Cerro Chuño, lugar que, al término de la pandemia, se convirtió en el bastión y centro de operaciones de Los Gallegos, célula del Tren de Aragua.

El lugar, en las últimas semanas, ha sido el epicentro de incursiones de individuos armados, que han dejado muertos y que son remanentes de bandas criminales rivales, como el Tren del Coro, que se descolgó de Los Gallegos por disputas territoriales.

El gobernador regional Diego Paco (RN) dijo ayer que, “este Gobierno tiene una deuda con los ariqueños: necesitamos que se pongan los pantalones y ordenen desalojar y demoler las tomas del Cerro Chuño. Allí es donde las bandas criminales operan, se esconden y asesinan”. La autoridad también alertó por las condiciones sanitarias en esa área cercana a un área industrial y donde hay contaminación con metales pesados.

El senador por Arica y Parinacota, José Miguel Durana (UDI), integrante de la comisión de Seguridad Pública, señaló que hay que enfrentar “con decisión el crimen organizado, el contrabando y todos aquellos ilícitos que hoy alteran la región”.

La Delegación Presidencial de Arica informó que un desalojo en noviembre pasado “permittió la recuperación de 3,7 ha de espacio público. “Continuaremos con más procesos de recuperación, con un enfoque responsable e integral”, dijo.

Denuncia

Además, ayer, el abogado Raimundo Palamara ingresó ante la Contraloría General de la República una denuncia, según la cual tres de los seremis interinos de Seguridad (de las regiones de Arica y Parinacota, Metropolitana y Biobío) no cumplirían con los requisitos legales para ejercer el cargo.